



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Ejecutivo singular
DEMANDANTE	Beatriz Elena González
DEMANDADO	Ana Rubia Restrepo Vélez y otro
RADICADO	05001 31 03 017 2018 00164 01
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la codemandada Ana Rubia Restrepo Vélez, en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 2 de diciembre de 2022 el Juzgado 017 Civil del Circuito de Medellín aprobó la liquidación de costas elaborada por la secretaria del despacho, conforme con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Allí se incluyó el valor de las agencias en derecho a cargo de los demandados por un monto de \$5'035. 200.oo

1.2. La apoderada judicial de la señora Restrepo Vélez presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, con el fin de que la decisión se reconsiderara en el sentido de reducir el monto de las agencias en derecho. Como cimientó sostuvo que, si bien la condena en costas obedece a un criterio objetivo y corren a cargo de la parte vencida, ocurre que, condenar al pago de un monto tan elevado después de conocer las condiciones que los demandados afrontan iría en contravía de los derechos que el ordenamiento jurídico protege mediante la Ley 1850 de 2017 (de protección al adulto mayor) y vulnerar así el estado mental actual que podían detentar. Recordó que su poderdante de principio a fin de la diligencia informó sobre la difícil situación económica que atravesaba, debido a que, no contaba con ingreso alguno que le permitiera vivir con dignidad más que lo que familiares y amigos le podían ofrecer.

1.3. Surtido el traslado sin pronunciamiento de la contraparte, el Juzgado 017 Civil del Circuito de Medellín en proveído de 27 de enero de 2023 resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable, por lo cual mantuvo incólume la decisión y concedió la alzada. Las razones de la decisión se concretaron en que, mediante el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, el Consejo Superior de la Judicatura reguló las tarifas de agencias en derecho, en su artículo 2 se relaciona los criterios que el juzgador debe atender, y destaca que deberá hacer la tasación dentro del rango de tarifas mínimas y máximas, y tener en consideración aspectos como la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión llevada a cabo por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se pueda desconocer los referidos límites.

Tratándose de procesos ejecutivos de mayor cuantía en única o primera instancia relativos a obligaciones de dar sumas de dinero; o de dar especies muebles o bienes de género distintos al dinero, de hacer, o de no hacer, que además contengan pretensiones de índole dinerario, en los que se dicte sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución, los límites se fijarán entre el 3% y el 7.5% de la suma determinada. Dijo que para este caso se tiene que el capital del mandamiento de pago era de 20.000 dólares, intereses de plazo causados 37.718 dólares, la tasa de cambio a la fecha de presentación de la demanda (4 de abril de 2018) se encontraba fijada en \$2.778,27, el capital en pesos al 4 de abril de 2018 era de \$55.565.400, intereses causados entre el 21 de noviembre de 2008 y 21 de junio de 2017 \$104.790.787,86, para un total de pretensiones de la demanda de \$160.356.187,86. Es decir que las agencias en derecho, a cargo de ambos demandados ascendió a \$5.000.000 lo que representa el 3.11% de la orden de apremio, calculada con base en la tasa de cambio a la fecha de presentación de la demanda, porcentaje que se ajusta a los rangos establecidos en el acuerdo referenciado.

En este sentido, determinó que no era dable reconsiderar la decisión, porque la situación económica particular de la codemandada no se encontraba entre los criterios a tener en cuenta para la fijación de las agencias en derecho. Así mismo, recordó que, si la codemandada no estaba en capacidad para asumir los gastos del proceso y reunía los requisitos para solicitar el amparo de pobreza, así debió pedirlo en el momento procesal oportuno. Por otro lado,

precisó que, de conformidad con lo indicado por la Corte Suprema de Justicia en Auto AL3121 de 2021, las costas se imponen de forma objetiva una vez se verifique que fueron causadas, que no es posible acudir a criterios subjetivos para exonerar a quien ha sido vencido en el proceso; y que las manifestaciones que se haga respecto a las dificultades económicas de la parte condenada en costas, no pueden prosperar porque el principio de gratuidad de la justicia no tiene carácter de absoluto. Finalmente, señaló que la condena en costas no transgredió las disposiciones de la Ley 1850 de 2017 en las que se establece medidas de protección al adulto mayor, porque en este caso es consecuencia de una sentencia judicial que no fue favorable a los intereses de la demandada.

### CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 366 del estatuto procesal establece las reglas que deben atenderse para la liquidación de las costas. En este sentido, la norma referenciada indica:

*"ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:*

*1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.*

*2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.*

*3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en*

*derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.*

*Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.*

*4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.*

*5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.*

*6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obediencia al superior, según el caso”.*

2.2. A su vez, el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 prevé las tarifas de agencias en derecho:

*"4. PROCESOS EJECUTIVOS. En única y primera instancia*

*- Obligaciones de dar sumas de dinero; o de dar especies muebles o bienes de género distintos al dinero, de hacer, o de no hacer, que además contengan pretensiones de índole dinerario.*

(...)

*c. De mayor cuantía.*

*Si se dicta sentencia ordenando seguir adelante la ejecución, entre el 3% y el 7.5% de la suma determinada, sin perjuicio de lo señalado en el parágrafo quinto del artículo tercero de este acuerdo.*

*Si se dicta sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado, entre el 3% y el 7.5% del valor total que se ordenó pagar en el mandamiento de pago.*

(...)."

#### CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al no reconsiderar la liquidación de agencias en derecho efectuada, en tanto, los criterios para la fijación de esta son objetivos, por lo que las circunstancias económicas particulares de la codemandada no podían ser tenidas en cuenta para tal fin.

Al respecto se tiene que lo definido por el fallador de primera instancia se ajusta a derecho, dado que, al revisar el expediente se aprecia que el 4 de abril de 2018 Beatriz Elena González presentó demanda ejecutiva frente a Ana Rubia Restrepo Vélez y Juan Fernando Velásquez para el pago del pagaré de 21 de noviembre de 2008 por valor de 20.000 dólares, más los intereses de plazo causados por un valor de 37.718 dólares. La tasa de cambio a la fecha de presentación de la demanda era de \$2.778,27. El capital en moneda legal colombiana el 4 de abril de 2018 era de \$55'565.400, por lo que la demanda fue catalogada como de mayor cuantía. Los intereses causados entre el 21 de noviembre de 2008 y el 21 de junio de 2017 equivalían a \$104'790.787,86; es decir que el total de las pretensiones a la fecha de presentación de la demanda era de \$160'356.187,86.

Ahora, efectuada la liquidación por parte de la secretaría del juzgado de primera instancia, se incluyó el valor de \$5.000.000 por concepto de agencias en

derecho, a cargo de los codemandados por partes iguales, es decir, que a la parte recurrente le corresponde sufragar \$2'500.000.00 cifra ubicada entre los límites determinados por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 que además guarda correspondencia con los criterios objetivos definidos en la norma en comento; sin que las circunstancias económicas de la recurrente sean factor determinante del monto fijado, pues como bien lo dijo el juez de primer grado, las situaciones de imposibilidad económica de sufragar los gastos del proceso debían ser alegadas en la oportunidad procesal correspondiente, de manera que, en caso de cumplir con los presupuestos de los artículos 151 y 152 del Código General del Proceso, la señora Restrepo Vélez podía obtener que se le concediera el amparo de pobreza.

Por otra parte, se observa que ni en las disposiciones de la Ley 1850 de 2017 se estipula la exención a que la recurrente aspira, ni tal beneficio aparece sometido al debate adelantado porque apenas al momento de la interposición del recurso contra el auto que impuso tal condena, se vino a mencionar la ley de protección al adulto mayor, sin acreditar las condiciones a que esta se refiere. En consecuencia, la decisión proferida por el Juzgado 017 Civil del Circuito de Medellín en auto de 2 de diciembre de 2022 será confirmada.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 2 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado 017 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. Sin condena en costas por cuanto no se causaron.

NOTIFÍQUESE

  
MARTHA CECILIA LEMA VILLADA  
Magistrada